



MAT.: APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA QUE INDICA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° 01516 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2009, DEL CONTRALOR GENERAL SR. RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA.

ALGARROBO, 15 de Mayo de 2009.
DECRETO: N° 1.227.-

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Ley N° 18.883 del 29.12.89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
3. D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.96. Aprueba Planta Municipal.
4. D.A. N° 2.983 de fecha 06.12.2008, Asume Alcaldía.
5. Acuerdo N° 08 de Acta N° 2 Ordinaria de fecha 15.12.2008 del H. Concejo Municipal y Decreto Alcaldicio N° 3.094 de fecha 22.12.2008, Aprueban Presupuesto Municipal para el año 2009.
6. Resolución N° 01516 de fecha 07 de mayo de 2009; del Contralor General de la Republica de Chile, Sr. Ramiro Mendoza Zuñiga.
7. La notificación de fecha 15 de Mayo del 2009 parte de Contraloría Regional de Valparaíso, al Sr. Alcalde de Algarrobo de la Resolución N° 1.516 del 2009 del Señor Contralor General de la Republica.

DECRETO:

- I. Aplíquese y Notifíquese a partir del 15 de Mayo del 2009, Resolución N° 1.516 de fecha 7 de Mayo del 2009 emitida por la Contraloría General de la Republica al Sr. Alcalde, la cual aprueba el Sumario Administrativo en análisis y su vista fiscal y propone en definitiva se aplique al Sr. Alejandro Navarrete Pinochet, Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, la medida disciplinaria de "DESTITUCION", establecida en la letra d) del Art. 120 en relación con el Art. 123, inciso segundo, ambos de la Ley N° 18.883, de acuerdo a la Resolución N° 01516 del Contralor General de la Republica de Chile, Sr. Ramiro Mendoza Zuñiga.
- II. ANÓTESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



GUILLERMO URQUIZA TAPIA
ALCALDE



ATALINA CHACON ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL

GUT/CCHE/grp.-
DISTRIBUCION:

- | | |
|--|-----|
| ✓ Contraloría General de la Republica de Chile | (3) |
| ✓ Contraloría Regional de Valparaíso | (3) |
| ✓ Sr. Alejandro Navarrete Pinochet | (1) |
| ✓ Dirección de Obra Municipal | (1) |
| ✓ Dirección Jurídica | (1) |
| ✓ Unidad de Control Informe | (1) |
| ✓ Recursos Humanos | (1) |

SANTIAGO,

07 MAYO 2009

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

VISTOS:

a) El sumario administrativo instruido en la Municipalidad de Algarrobo, por la Contraloría Regional de Valparaíso, de acuerdo con la resolución exenta N° 279, de fecha 29 de octubre de 2007, y su ampliación, ordenada a través de la resolución exenta N° 336, de 26 de diciembre de ese mismo año, cuya Vista Fiscal rola a fojas 437 y siguientes del cuaderno principal.

b) La formulación de cargos en contra de don Alejandro Navarrete Pinochet, a fojas 359 y 360 del cuaderno principal.

c) Los descargos presentados por don Alejandro Navarrete Pinochet, a fojas 368 y siguientes del cuaderno principal.

d) La proposición de medida disciplinaria efectuada por la Contraloría Regional de Valparaíso, mediante resolución exenta N° 177, de 26 de agosto de 2008, que rola a fojas 458 del cuaderno principal.

e) Las observaciones a la Vista Fiscal formuladas por don Alejandro Navarrete Pinochet, a fojas 463 y siguientes del cuaderno principal.

f) Lo dispuesto en el Título VIII de la ley N° 10.336 y en los artículos 28 y 32, letra b), de la resolución N° 236, de 15 de junio de 1998, Reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1° Que en el proceso instruido, se pudo comprobar que, mediante resolución DOM N° 009/04, de 19 de enero de 2004, don Alejandro Navarrete Pinochet, Director de Obras de la Municipalidad de Algarrobo, aprobó, en principio, el proyecto de loteo Bosques de Algarrobo, que contemplaba la alteración del trazado de calle Federico Villaseca -afecta a utilidad pública en su ensanche- y la eliminación de la calle El Cañadón -también afecta a utilidad pública-, ambas, establecidas como vías estructurantes en el Plan Regulador de dicha comuna.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISION JURIDICA

Que la referida aprobación, fue dada sin efectuar, previamente, el procedimiento que establecen los artículos 43 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- y, el inciso decimosegundo del artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -aprobada por el decreto N° 47, de 1992, del aludido Ministerio-, para modificar el Plan Regulador Comunal, forma en la que podían ser desafectados dichos trazados.

Que en las observaciones formuladas a la Vista Fiscal, el inculcado expone, una vez más, que la conducta antes descrita, encuentra su justificación en la errónea interpretación que, en su momento, hizo del nuevo artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -introducido por la ley N° 19.939, publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de febrero de 2004-, pues del tenor de su texto y, de la interpretación que a su respecto efectuó la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la circular ordinaria N° 102, DDU N° 134, de abril de 2004, se entendía que la declaratoria de utilidad pública que afectaba a las calles Federico Villaseca -en su ensanche- y El Cañadón, había caducado automáticamente, desde la fecha de publicación de dicho texto legal, por lo que no se requería efectuar el procedimiento cuyo incumplimiento se le imputa.

Que lo anterior, se habría visto verificado por la interpretación que, de dicho precepto, efectuó, posteriormente, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante la circular ordinaria N° 135, DDU N° 143, de abril de 2005, a través de la cual, se estableció, en definitiva, y de forma clara, la correcta aplicación del aludido artículo 59, señalándose el plazo de 5 años, contados desde la publicación de la referida ley N° 19.939, para la caducidad de las vías señaladas precedentemente.

Al respecto, es dable manifestar que la ley N° 19.939 aludida, que estableció el nuevo artículo 59 a que se ha hecho referencia precedentemente, fue publicada en el Diario Oficial, en el mes de febrero del año 2004, es decir, con posterioridad a que se emitiera la resolución DOM N° 009/04, por la que se aprobó el proyecto de loteo de la especie, por lo que su errada interpretación no puede esgrimirse como justificativa de tal acto administrativo.

Asimismo, y considerando que, en los actos que fueron dictados, en lo sucesivo, en relación al referido proyecto, se incurrió en errores en la aplicación del citado artículo 59, no cabe sino reiterar que, las alegaciones efectuadas por el inculcado, no permiten que éste se exima de la responsabilidad administrativa que por sus actos le corresponde, en relación con la conducta descrita, pues, si bien se trataba de una normativa nueva, de la sola lectura del artículo transitorio de la misma -que se refiere a aquellas declaratorias de utilidad pública, vigentes a la fecha de publicación de la referida ley- se desprende que el ensanche de la calle Federico Villaseca y la calle El Cañadón, se encontraban con sus declaratorias de utilidad pública vigentes, no dando cumplimiento, de todas formas, a lo señalado en el aludido artículo, esto es, informar y pedir autorización a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, sobre los destinos que tendrían esos terrenos.

Lo anterior, además, se vio agravado por el incumplimiento de parte del funcionario sumariado, de las constantes instrucciones que efectuó la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en orden a que se rectificaran los errores cometidos.

2° Que, asimismo, se constató que, mediante resolución DOM N° 227/07, el señor Alejandro Navarrete Pinochet, otorgó la recepción definitiva parcial a los módulos 22 y 23, de la etapa 5, del proyecto Condominio Altos de Mirasol II, a pesar de no cumplir éste, con las normas urbanísticas que le eran aplicables.

En efecto, según el Plan Regulador Comunal de Algarrobo, la zona en la cual se proyectan los referidos módulos, permite una altura máxima de 9 metros o 3 pisos, mientras que el proyecto citado, contemplaba la construcción de edificios de 8 pisos, en abierta contradicción al instrumento de planificación territorial aludido, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y, su respectiva Ordenanza.

No altera la conclusión señalada precedentemente, lo manifestado por el inculpado, en orden a haberse adoptado el acuerdo N° 68, de 2000, por el Concejo Municipal de Algarrobo, en el que se habría aprobado el inicio de las gestiones necesarias para tramitar el cambio de uso de suelo de la zona en que se asentaría el condominio Altos de Mirasol II, atendido que, el acto administrativo por el cual debía concretarse dicha modificación, en definitiva, no fue dictado.

Tampoco modifica lo expuesto, el que el referido proyecto se haya acogido a las normas sobre conjuntos armónicos, pues ello sólo le permitía aumentar el coeficiente de constructibilidad en un 50% y, un 25% respecto de la altura, lo que, aun de haber mediado confusión por parte del inculpado, en relación con los porcentajes aplicables -en cuanto a si el 50% era también aplicable a la altura-, en ningún caso admitía la autorización de los 8 pisos existentes.

Ahora bien, en sus observaciones a la Vista Fiscal, el señor Navarrete Pinochet señala que no se hizo referencia en la misma, a los planos enviados a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en que se contemplaba una altura de hasta 22 metros, así como tampoco, a la certificación del revisor independiente en que afirma que procedía otorgar el aludido permiso.

En relación con la primera alegación, cabe señalar que, el oficio N° 1.901, de 2000, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, citado por el inculpado como relativo a los planos aludidos, expresamente señaló que el proyecto excedía la constructibilidad y altura permitidas en la zona donde se emplazaría el condominio a edificar, indicando, en relación con la solicitud de acogerse a las normas sobre conjuntos armónicos, que debían cumplirse, aún, ciertos requisitos, lo que, en caso alguno, validaba una eventual autorización de 8 pisos en esa zona.

DIVISION DE MONITORIA
SUBDIVISION JURIDICA

Por su parte, en cuanto a la certificación del revisor independiente, cabe señalar que, si bien éste era un antecedente que el inculcado debía considerar, no le resultaba imperativo y, menos, lo exime de su responsabilidad, pues una de sus funciones es, precisamente, verificar que los proyectos sometidos a su aprobación cumplan con las normas urbanísticas, contenidas tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, como en el respectivo instrumento de planificación territorial; lo que, considerando lo manifiesto de la infracción y, el pronunciamiento expreso de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al respecto, a través del citado oficio N° 1.901, debió haber efectuado.

3° Que, además, se pudo establecer que el señor Alejandro Navarrete Pinochet, emitió juicio sobre títulos de dominio de particulares, al pronunciarse sobre las cabidas y deslindes de las parcelas N°s. 9, 10 y 11, en el oficio DOM N° 155/04, de abril de 2004; y, al realizar un trazado, de su puño y letra -para graficar la diferencia de deslindes entre dos propiedades-, sobre la copia del plano N° 16, el que, posteriormente fue presentado como prueba en un juicio seguido entre particulares.

Respecto de las observaciones a la Vista Fiscal formuladas por el inculcado, éstas no constituyen más que una reiteración de lo alegado por éste a lo largo del proceso, todo lo cual, fue debidamente analizado y ponderado.

En efecto, tanto el juicio emitido por el señor Navarrete Pinochet, en el oficio DOM N° 155/04, como el trazado efectuado en el plano N° 16 aludido, no se ajustan a la legalidad, por cuanto se relacionan con títulos de dominio de particulares y asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, respectivamente, materias de naturaleza litigiosa, respecto de las cuales, el Director de Obras Municipales no ha sido dotado de la facultad de pronunciarse.

4° Finalmente, se comprobó que don Alejandro Navarrete Pinochet, desobedeció las órdenes impartidas, tanto por el Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo, a través del ordinario N° 59, de 31 de enero de 2007, como por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, mediante los ordinarios N°s. 1.169 y 1.819, ambos de 2006 y, 147 y 528, de 2007.

Al respecto, cabe reiterar que, si un funcionario estima ilegal una orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley N° 18.883, lo que debe hacer es representarla por escrito a su superior y, si éste la reitera, debe cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, siendo éste el procedimiento que debió haber seguido el funcionario sumariado, de oponerse a lo ordenado por sus superiores.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, en relación con la orden impartida por la autoridad edilicia, los argumentos esgrimidos por el inculcado no permiten alterar la conclusión a que se ha hecho referencia precedentemente, máxime si, de los antecedentes que

REPUBLICA DE CHILE
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISIÓN JURÍDICA

constan en el sumario, no aparece que el alcalde haya dejado sin efecto lo manifestado a través del aludido oficio N° 59, de 2007, por lo que no existía motivo que justificara el incumplimiento que se imputa.

Por su parte, en lo que se refiere a las órdenes cursadas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, el imputado sostiene, en relación con las dos primeras -ordinarios N°s. 1.169 y 1.819, ambos de 2006- que, además de encontrarse dirigidos al particular, señor Boris Colja Sirk, no contenía una orden directa, el primero e, instruía a efectuar la apertura de la calle Federico Villaseca, el segundo, en circunstancias que, a su juicio, ello era imposible de cumplir, atendido que dicha vía ya se encontraba abierta.

Al respecto, es dable consignar que, en ambas comunicaciones, se dejan de manifiesto los errores en que incurrió el inculcado, en relación con la aprobación del proyecto Bosques de Algarrobo, pues no sólo se señala que dicha vía sigue afecta a declaratoria de utilidad pública, sino que se indica que el trazado de la misma sólo podía ser precisado o modificado a través de la aprobación de un Plano Seccional o la modificación del Plan Regulador Comunal, por lo que, la orden de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, decía directa relación con lo expresado en dichos oficios.

Ahora bien, en cuanto a las otras dos comunicaciones -ordinarios N°s. 147 y 528, ambos de 2007- el señor Navarrete Pinochet argumenta como justificación de su actuar, el haber transcurrido, desde la emisión de los oficios cuya modificación se ordenaba, más de dos años, por lo que, de acuerdo al artículo 53 de la ley N° 19.880, no procedía su invalidación.

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien la orden de los oficios aludidos no era la de invalidar los actos en ellos contemplados, aun de haber sido ésta, correspondía que fuera acatada, no sólo por los argumentos ya esgrimidos, sino además, por constituir, los oficios N°s. 147 y 528, una reiteración de las órdenes que, en términos generales y, dentro del término de dos años a que el funcionario sumariado hace referencia, ya habían sido impartidas.

5° Que, por los hechos descritos, se dedujeron cargos contra el señor Alejandro Navarrete Pinochet, Director de Obras de la Municipalidad de Algarrobo, los que, conjuntamente con los descargos planteados, las observaciones a la Vista Fiscal formuladas y la medida disciplinaria propuesta a su respecto, han sido debidamente analizados.

6° Que las conductas expuestas, implican una infracción al deber funcionario contemplado en la letra f) del artículo 58 de la ley N° 18.883 y, una vulneración grave al principio de probidad administrativa, según lo dispuesto en la letra g) del citado precepto y en el N° 8 del artículo 62 de la ley N° 18.575, en relación con el artículo 24, letra a), de la ley N° 18.695, cuya sanción aplicable es la establecida expresamente en el artículo 123 de la aludida ley N° 18.883, todas, constitutivas de graves anomalías que se

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISIÓN JURÍDICA

encuentran fehacientemente acreditadas, con el mérito de los antecedentes que constan en el proceso.

de sus atribuciones legales,

El Contralor General infrascrito, en uso

RESUELVE: **01516**

Aprobar el sumario administrativo en análisis y su Vista Fiscal y proponer, en definitiva, que se aplique a don Alejandro Navarrete Pinochet, Director de Obras de la Municipalidad de Algarrobo, la medida disciplinaria de "Destitución", establecida en la letra d) del artículo 120, en relación con el artículo 123, inciso segundo, ambos de la Ley N° 18.883.

ANÓTESE, AGRÉGUESE AL EXPEDIENTE
Y NOTIFÍQUESE

FDO. : RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

VICTORIA NARÁEZ ALONSO
INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN
SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA